

JUZGADO PROMISCOVO MUNICIPAL DE SIBATE

Sibaté, octubre doce de dos mil veintiuno

Se encuentran al despacho las presentes diligencias a fin de proferir la decisión que en derecho corresponde respecto de la petición de acción de tutela instaurada por la señora MARTHA INES CASTILLA SANCHEZ en contra del BANCO ITAU.

ANTECEDENTES

La señora MARTHA INES CASTILLA SANCHEZ quien actúa en nombre propio, instauró ante este Despacho acción de tutela en contra del BANCO ITAU solicitando se tutele el derecho fundamental de petición.

Como fundamento de su petición la accionante narra los hechos indicando que en ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la constitución política y reglamentado por la Ley 1755 del 30 de junio del año 2015, elevó un derecho de petición ante el accionado.

Que dicho derecho de petición fue radicado en la entidad accionada el 28 de agosto del año 2021 de manera virtual por medio del correo electrónico maria.noguera@itau.co.

Trae a colación la Ley 1755 del 30 de junio de 2015 artículo 14.

Que la entidad accionada viola el derecho fundamental de petición pues no ha dado respuesta de fondo y de manera concisa a las peticiones solicitadas, que ha mantenido silencio y caso omiso a la petición, que han transcurrido más de 10 días hábiles establecidos para ello, que a la fecha de la presentación de la tutela no hay ningún tipo de pronunciamiento.

Que procede la acción de tutela de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el decreto 2591 de 1991.

Refiere el artículo 13, 23 y 29 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1755 de 2015, Decreto 491 de 2021 artículo 5°, sentencias C-134/94, T-105/96, T-738/98, T-789/98, T-131/98,

Que ante la omisión del BANCO ITAÚ se ha quebrantado el derecho fundamental de petición ignorando las disposiciones constitucionales, que no ha podido conocer su situación en relación con sus peticiones.

Hace referencia al artículo 23 numeral 3°, artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos, Ley Estatutaria 1581 de 2012 artículo 1°.

Pretende se le tutele el derecho fundamental de petición y de igualdad ante la ley, que se ordene a la entidad bancaria BANCO ITAÚ que, en el término máximo de 48 horas, de respuesta de fondo, de manera clara y concisa al derecho de petición elevado el 28 de agosto del año 2021 de manera virtual por medio del correo electrónico, que se vigile el cumplimiento del BANCO ITAÚ de forma tal que la empresa accionada no continúe la vulneración y amenaza de sus derechos fundamentales.

Allega como pruebas la accionante lo relacionado en el acápite de pruebas y anexos.

Este Juzgado avoco conocimiento y dispuso por el medio más eficaz notificar en legal forma al accionado, para lo cual se libraron las comunicaciones como obra en el expediente. Se deja

constancia que pese a estar notificado en legal forma el accionado BANCO ITAU, el mismo guardó silencio.

#### CONSIDERACIONES

En virtud al derecho constitucional establecido en el art. 86 la señora MARTHA INES CASTILLA SANCHEZ acude ante el juez a fin de que mediante un trámite preferencial y sumario se le tutele el derecho fundamental de petición consagrado en la Constitución Política.

El art.1º preceptúa: "...Colombia es un estado Social de derecho organizado en forma de Republica unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general..."

Nuestra Carta magna en su art. 2 indica: "... Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, proveer la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo..."

El art. 23 preceptúa: "Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales".

El derecho de petición está consagrado en la carta magna para que todas las personas que han presentado peticiones obtengan una pronta respuesta.

De igual forma este derecho es aquel que tienen los ciudadanos de dirigirse a una autoridad, con la seguridad que van a recibir una respuesta pronta, oportuna sobre su pedimento, esta respuesta debe definir de fondo la solicitud elevada o por lo menos explicar con claridad las etapas, medios términos o procesos necesarios para dar una respuesta definitiva y contundente a quien la presentó, así se ha pronunciado la Honorable Corte Constitucional, esa omisión en que incurre la autoridad al no responder las peticiones con la necesaria prontitud, es de por sí una violación al derecho de petición.

Como se ha pronunciado la Honorable Corte Constitucional, "la naturaleza del derecho de petición, y en particular su núcleo esencial, como derecho fundamental objeto de protección tutelar, es la certidumbre de que, independientemente del contenido de lo que se solicita, se obtenga una respuesta oportuna y eficaz, es decir, que resuelva en su fondo lo pedido por el particular.

Igualmente, ha establecido la Honorable Corte Constitucional que el núcleo esencial de este derecho está determinado por la pronta respuesta o resolución a lo pedido, respuesta que se entiende dada cuando se resuelve de fondo la cuestión planteada, sin importar si es a favor o en contra de las pretensiones del solicitante y, en la efectiva notificación del acto, a través del cual, se resuelve la petición presentada.

La sentencia T-149/13 indica: "... 4.1. Esta Corporación ha precisado que el derecho de petición consagrado en el Artículo 23 de la Constitución Política, es una garantía fundamental de aplicación inmediata (C.P. art. 85), cuya efectividad resulta indispensable para la consecución de los fines esenciales del Estado, especialmente el servicio a la comunidad, la garantía de los principios, derechos y deberes consagrados en la misma Carta Política y la participación de todos en las decisiones que los afectan; así como el cumplimiento de las funciones y los

deberes de protección para los cuales fueron instituidas la autoridades de la República (C.P. art. 2). (...)

(...) 4.2. Según su regulación legislativa, así como en el Decreto 01 de 1984, el actual Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que el ejercicio del derecho de petición, entendido también como una actuación administrativa, debe someterse a los principios de economía, imparcialidad, contradicción, eficacia y, especialmente, publicidad y celeridad, según lo estipula el Artículo 3o. del estatuto..." (...)

(...) 4.3. Entendido así, como garantía constitucional y legal, el ejercicio del derecho de petición por parte de los ciudadanos supone el movimiento del aparato estatal con el fin de resolver la petición elevada e impone a las autoridades una obligación de hacer, que se traduce en el deber de dar pronta respuesta al peticionario.

4.4. Justamente, este deber esencial de parte de la administración, que se deriva del mandato superior a obtener pronta resolución, ha sido desarrollado y sistematizado por esta Corporación en conjunto con otros elementos característicos del derecho de petición, que conforman su núcleo fundamental.

4.5. La efectividad y el respeto por el derecho de petición se encuentran subordinados a que la autoridad requerida, o el particular según se trate, emitan una respuesta de fondo, clara, congruente, oportuna y con una notificación eficaz.

4.5.1. En relación con los tres elementos iniciales - resolución de fondo, clara y congruente-, la respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición. Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo solicitado..."

Revisadas las presentes diligencias, observa este Despacho que del material probatorio que aparece relacionado y anexo al expediente, se puede concluir efectivamente, que la accionante radicó derecho de petición el 28 de agosto del año 2021 de manera virtual por medio del correo electrónico maria.noguera@itau.co ante el BANCO ITAU.

Se tiene que, dentro de las presentes diligencias el accionado BANCO ITAU pese a estar notificado en legal forma del auto admisorio de la presente acción de tutela guardó silencio y no obra constancia por parte de éste, en donde se evidencie que efectivamente haya dado contestación a la petición que fue radicada por la accionante el 28 de agosto del año 2021 de manera virtual por medio del correo electrónico maria.noguera@itau.co ante el BANCO ITAU conforme se desprende del escrito de tutela.

Teniendo en cuenta lo anterior carece este Despacho de la prueba sumaria en donde se pueda verificar que el derecho de petición fue contestado por parte del BANCO ITAU.

Por lo brevemente expuesto se procederá a tutelar el derecho fundamental de petición incoado por la señora MARTHA INES CASTILLA SANCHEZ, en consecuencia, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente decisión se ha de dar respuesta de fondo por parte del BANCO ITAU a la petición presentada por la señora MARTHA INES CASTILLA SANCHEZ el pasado 28 de agosto del año 2021 de manera virtual por medio del correo electrónico maria.noguera@itau.co ante el BANCO ITAU en legal forma.

Esta decisión se ha de notificar por el medio más eficaz, advirtiéndole a la accionante y al accionado, que la anterior decisión es susceptible de impugnación, de no ser así, se ha de remitir a la H. Corte Constitucional, para su eventual revisión.

En mérito de lo expuesto el Juzgado Promiscuo Municipal de Sibaté Cundinamarca, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE

Primero: TUTELAR el derecho fundamental de petición incoado por la señora MARTHA INES CASTILLA SANCHEZ quien se identifica con la C.C.Nº39. 539. 358 de Bogotá, en consecuencia, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente decisión se ha de dar respuesta de fondo por parte del BANCO ITAU a la petición presentada por la señora MARTHA INES CASTILLA SANCHEZ el pasado 28 de agosto del año 2021 de manera virtual por medio del correo electrónico maria.noguera@itau.co ante el BANCO ITAU en legal forma, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

Segundo. Notifíquese la anterior decisión a la señora accionante y al accionado mediante cualquier medio idóneo de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y Decreto 306 de 1992.

Tercero: La anterior decisión es susceptible de impugnación, de no ser impugnada remítase a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La Juez,

  
MARTHA ROCIO CHACON HERNANDEZ